

C. INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO LIX KLETT

Posdata de la carta enviada por el matemático y físico tucumano doctor Félix Herrera al rector de la Universidad de Tucumán, profesor contador público nacional don Mario A. Marigliani

Tafi del Valle, 8 de enero de 2005.

Señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, profesor contador público nacional don Mario A. Marigliani.

De mi distinguida consideración:

Como es de público conocimiento, el 3/1/05 se extinguió la vida del profesor doctor Fernando J. López de Zavalia. La vecindad temporal de tan infausto hecho con el comienzo de un nuevo año, motivó que el Consejo Universitario, encarnado en la persona del señor rector, no rindiera al ilustre extinto los honores que a lo largo de su vida se hizo acreedor.

Ninguna persona vinculada a la universidad puede ignorar, cualquiera sea su especialidad, sus brillantes dotes de jurista y de maestro del derecho en el auténtico sentido del vocablo. Prueba irrefutable de esta afirmación, pero sólo parcial, es que sus libros constituyen fuente obligada de consultas en todas las universidades de la república.

La circunstancia de que en el plano político ideológico militáramos en bandos opuestos, no me obnubila para dejar de admirar el renombre que su obra aportó a la que fue mi alma máter.

Por todo lo arriba expuesto, solicito al señor rector que a la mayor brevedad posible se adopten las dos siguientes medidas:

1° - Que al doctor Fernando López de Zavalia se le otorgue *post mortem* el diploma de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Tucumán.

2° - Que tan pronto se reanude el nuevo ciclo lectivo, pero fijando fecha desde ya, en el acto de la tocante ceremonia se coloque una placa recordatoria en el lugar donde se encuentran sus restos.

3° - Como antecedente del otorgamiento de un doctorado Honoris Causa, *post mortem*, menciono el de mi inolvidable maestro profesor doctor José Wütschmidt. Tuve el alto honor de despedir sus despojos mortales en el patio central de la universidad donde fueron velados sus despojos. La placa correspondiente se colocó después en el Instituto de Física que él fundó desde sus comienzos mismos.

Rogándole disculpar la impropiedad de mi grafía, producto de mi avanzada miopía, le reitero mis distinguidos saludos.

Félix E. Herrera, DNI 3.612.094.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO MACALUSE

Fundamentos de la abstención del señor diputado en la votación del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley en revisión por el cual se regula el régimen al que quedarán sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido canjeados según lo establecido por el decreto 1.735 de 9 de diciembre de 2004

Señor presidente: esta iniciativa se va a votar bajo el supuesto de que si el Congreso establece la imposibilidad de que el gobierno cambie la propuesta elevada a los bonistas, los tenedores de títulos saldrán corriendo a adherir a la reestructuración en virtud de creer que la ley se va a cumplir.

Creo que esta norma va a tener algunos problemas para alcanzar ese objetivo. En primer lugar, el artículo 75 de la Constitución Nacional es claro y taxativo: el Congreso debe arreglar la deuda interior y exterior del país.

Ello implica revisar hacia atrás el origen y legitimidad de la deuda para saber qué proporción de ella se debería pagar. En segundo lugar, está implícito el control de las negociaciones hacia el futuro, a fin de que sea el Congreso, y no los organismos financieros internacionales, los que monitoreen la forma en que se negocia la deuda.

A pesar de que la Constitución es absolutamente clara, esto no se hizo. Ello no sólo lo señala la Carta Magna, sino que lo plantea el juez Ballesteros en un fallo que es consecuencia de la investigación de años de Alejandro Olmos. Allí se muestra taxativamente la suma de irregularidades que originaron la deuda externa, de la cual debieron hacerse cargo gobiernos constitucionales, los que lamentablemente la convalidaron y consintieron.

Lo dicen proyectos de ley de numerosos diputados —algunos del oficialismo—, que concuerdan con propuestas que hemos hecho nosotros, en el sentido de revisar la deuda externa antes de continuar con las negociaciones para saber qué porción es legítima, para pagarla, y qué parte es ilegítima, para no pagarla. Muchísimos diputados así lo hemos planteado en distintas sesiones especiales.

En la investigación que se lleva a cabo en la causa penal, se pudo saber, a través de los dictámenes de los peritos judiciales que actuaron en ella, que hay razones suficientes para mostrar la ilegitimidad y la fraudulencia. Voy a resumir algunas de ellas:

—La naturaleza del gobierno que generó el crecimiento desmesurado de la deuda entre 1976 y 1982;

—El haberse dispuesto someter al país a tribunales extranjeros;

—La ley 21.305 del gobierno militar que modificó el Código Penal;

—La deuda externa argentina según los peritos de la causa no tiene justificación administrativa, económica ni financiera y por ende los actos de endeudamiento son ilícitos. Ellos no pueden generar derechos a favor de los beneficiarios, no pueden ser legítimos los resultados de los actos delictuales.

La carencia de registros de validez contable quita toda eficacia legal a las acreencias invocadas. Si resulta ilegítima la masa de supuestos débitos externos del endeudamiento, resultan ilegítimas todas las renovaciones y refinanciaciones posteriores. Si el origen es ilegítimo no puede ser legítimo el resultado.

De los informes producidos por el Banco Central, en relación con las nóminas de acreedores y deudores del sector externo, resulta la existencia de deudores que son bancos acreedores, lo que es gravísimo.

El ítem de los intereses aplicados tiene especial significación del orden del 1% y 1,5% llegaron al 22%.

El aumento de las tasas fue impuesto por el acreedor en forma unilateral, y a partir del plan Brady se establecen intereses sobre los intereses y esto es anatocismo que está prohibido por nuestra legislación. Esto es lo que planteaban los peritos, y en el dictamen, el juez detalla diecinueve cuestiones que él mismo enumera en el juicio y después recoge en su libro.

Hace saber que muchos préstamos fueron aprobados por el Banco Central en virtud de actas secretas.

Cuando el juez solicitó que se las enviaran, los responsables del Banco Central se negaron a hacerlo. También se señala que el Banco Central no tiene registros contables de la deuda externa y sólo manejaba datos de ella en forma estadística.

El presidente del Banco Central de aquel momento, Adolfo Diz, declaró que algunos préstamos otorgados estaban registrados en una libreta negra y en una contabilidad paralela. El Ministerio de Economía no llevaba ningún registro de la deuda, ni siquiera para fines estadísticos.

Los peritos contables se quejaron de que el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Banco de la Nación Argentina retacearon información y pusieron obstáculos a su labor de investigación.

El presidente del Banco Central, Adolfo Diz, autorizó muchos créditos sin el consentimiento del directorio, lo que estaba prohibido por la ley. Asimismo, el vicepresidente, Cristian Zimmermann, hizo lo mismo, con el agravante de que el presidente del Banco Central no se enteró de ello. Además de lo señalado, el ministro Cavallo estatizó la deuda privada. Tanto el directorio del Banco Central como el Ministerio de Economía no realizaron estudios sobre las condiciones económicas y financieras inter-

nacionales que aconsejaban no endeudar al país en ese momento.

Las autoridades de los dos organismos oficiales desoyeron los informes y las críticas que elevaron sus propios cuerpos técnicos: la Gerencia de Investigaciones Económicas y Estadísticas y la Gerencia del Sector Externo. Según el juez, actuaron con negligencia, impericia e indiferencia ante el peligroso crecimiento de la deuda.

El acrecentamiento de la deuda externa privada y pública entre 1976 y 1982 fue excesivo, perjudicial y carente de significación económica, financiera y administrativa. La deuda se contrajo durante un gobierno militar, y las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que condicionaron el endeudamiento, no fueron dadas a publicidad.

Al 22 de enero de 1985, las empresas privadas habían obtenido créditos externos aprobados por el Banco Central por veintitrés mil millones de dólares. De las setenta deudoras mas grandes, veintiséis eran bancos y financieras, es decir, se trataba de empresas que solicitaron dinero para volver a prestarlo en el país.

Agentes privados gestionaron créditos en nombre del Banco Central sin que se conocieran los motivos de esa conducta, que era irregular. El Banco Central pagó gastos, comisiones y honorarios mayores a los usuales en cada uno de los casos, sin dar una explicación que lo justifique.

La Unión de Bancos Suizos, al otorgar algunos créditos, influyó para que el Estado comprara la Compañía Italo Argentina de Electricidad, con el agravante de que se la pagó un precio siete veces superior al real.

El Banco Central exceptuó al Banade y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires de exigir los requisitos legales para otorgar avales a grandes empresas, que luego no pagaron sus créditos, debiendo hacerlo el Estado en lugar de esas empresas.

Es decir que hubo una serie de irregularidades tremendas que podríamos ejemplificar con un solo caso. Entre julio y noviembre de 1976 —sólo cinco meses— el Banco Central obtuvo créditos por veintidós millones de dólares, pagando un interés del 8,75 %, y de inmediato los depositó en el Chase Manhattan Bank de Nueva York, cobrando un interés del 5,6 %.

Hoy venimos a debatir, pero no en torno del tema de fondo; venimos a discutir una jugarreta que el gobierno intenta hacer respecto de los acreedores pensando que éstos van a creer en ella. Formulo la siguiente pregunta: si no se respeta lo que explícitamente dice la Constitución, ¿qué acreedor será tan imbécil de creer que nosotros vamos a cumplir con una ley? Esta es la pregunta que es necesario responder para saber si tiene sentido venir acá con el fin de votar esta ley ¿Surtirá efecto sobre los acreedores o se trata de una movida “para la gilada” que aparecerá en los titulares de los diarios, para que se crea que el presidente está luchando contra los

acreedores privados cuando en realidad está negociando y haciendo otras cosas?

Cuando preguntaron a Domenico Siniscalco, ministro de economía de Italia, qué efectos podría tener esta ley sobre las acreencias de los italianos, contestó con un implacable grado de austeridad y sorna. Dijo que no le preocupaba, porque toda ley se modifica con otra ley. Creo que lo dijo de esa forma en razón de que la cortesía diplomática le impedía decir que toda ley puede ser modificada con un decreto de necesidad y urgencia, pues tanto los acreedores como el ministro italiano saben que el presidente de nuestra Nación es proclive a ese instrumento. Pero a pesar de la cortesía que tuvo, queda claro y denuncia el carácter infantil de la medida que aquí se va a tomar.

Si el Poder Ejecutivo asumió esta renegociación y el presidente dijo que no habrá una nueva propuesta ni se moverá de la adoptada, ¿por qué ahora necesita que su palabra sea reforzada por el Congreso? Necesita que su palabra sea reforzada por el Congreso porque con anterioridad respecto de la deuda externa formuló promesas que luego no cumplió. Por eso, al decir en esta negociación "me planto y no me muevo" no es creíble para los acreedores con quienes supuestamente confronta.

Cuando asumió, el presidente comenzó diciendo en la Asamblea Legislativa que la deuda externa era impagable. Después mandó a su ministro a Dubái, donde dijo que iba a haber una quita del 75 por ciento. Más tarde su jefe de Gabinete vino a decir acá que eso era piso y techo, y que de ahí no habrían de moverse. Sin embargo luego se movieron y generaron la propuesta que actualmente se está considerando.

En el mes de febrero del año pasado el presidente de la Nación también dijo que no iba a pagar al FMI la deuda que vencía en marzo, pero finalmente pagó. El presidente necesita que el Congreso refrenda a los fines de reforzar la negociación porque su palabra no tiene suficiente respaldo y está devaluada también para los acreedores, que son mucho menos inadvertidos que gran parte de los ciudadanos argentinos.

¿Por qué el Congreso tiene que actuar como tarrabos de los recules y las bravuconadas del presidente de la Nación? ¿Por qué el Parlamento no asume la responsabilidad histórica de cumplir con lo que establece el artículo 75 de la Constitución, al que constantemente se está esquivando el bulto?

Por otro lado, ¿el Congreso tiene respaldo suficiente para avalar la palabra presidencial? Acá no sólo se devaluó la moneda sino también la palabra de la política y el valor simbólico, político y jurídico de las leyes. Y se los devaluó precisamente votando leyes como ésta, que debilitan a la institución; pero también se corre el riesgo de que se debilite la negociación que la Argentina está llevando a cabo con los acreedores cantando envidia con veinte. Los acreedores conocen la situación de nuestro país me-

jor que nadie porque la monitorean de modo permanente.

¿Acaso este Congreso no ha sancionado leyes de las cuales se desdijo pocos meses después? Por ejemplo, se sancionó la ley de responsabilidad fiscal y dos meses después el gobierno remitió un presupuesto diciendo que no la iba a cumplir, cuando dos meses antes sostenía que el país se caía a pedazos si esa ley no se sancionaba.

Cabe recordar también que se sancionó la ley de intangibilidad de los depósitos, sabiendo que un mes después se iba a imponer un corralito que impediría a millones de argentinos tomar sus propios depósitos.

Con este tipo de medidas se está disminuyendo el valor intrínseco que tienen las instituciones y eso no genera fortaleza en las negociaciones sino debilidades porque no hay credibilidad interna.

Nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que asumió el gobierno en la deuda externa porque parte de la premisa de que si se tomaba como acreedores privilegiados a los organismos financieros internacionales, éstos no iban a intervenir en la negociación con los acreedores privados. Esto implica suponer que los intereses de los organismos financieros internacionales y los de los grandes bancos no son los mismos, y este es un tremendo error, en el caso de que lo haya sido.

Esa estrategia importó no tratar en el Congreso iniciativas sobre el origen y legitimidad de la deuda, no investigarla. Se denunció en todos los foros al Fondo Monetario Internacional, pero se lo asumió como acreedor privilegiado. Tanto es así que de nuestros últimos gobiernos éste ha sido el que más ha pagado a los organismos crediticios. A pesar de ello, el FMI no hizo los reembolsos a los que estaba comprometido, presionó sobre la deuda privada y sigue haciéndolo, aunque además ahora pide reformas estructurales de segunda y tercera generación. Esto significa que la premisa de la que partía el gobierno no se dio en esta negociación, sin contar por otra parte que en el medio de ella se convalidaron desmanejos y exacciones, como por ejemplo los de la AFIP contra los intereses de sus aportantes.

Cada reestructuración sin revisión de la legitimidad y el origen de la deuda implica consentimiento y convalidación de una de las mayores estafas económicas y políticas que se han realizado en nuestro país en contra de los intereses del conjunto de la población.

Solicitamos que la votación sea nominal. No convalidaremos con nuestro voto la estrategia del gobierno ni el uso de las instituciones ni el escamoteo de la discusión del origen de la deuda. En este punto solicito la inserción en el diario de sesiones de una síntesis de los fundamentos que Alejandro Omos plantea en su trabajo sobre la deuda externa.

Tampoco queremos ser instrumentos involuntarios de las presiones que generarán los acreedores internacionales, a los que no les asiste ningún derecho, porque si compraron los bonos argentinos, con las tasas enormes que tenían, era precisamente porque asumían el riesgo en la "timba" de la compra. Por eso no votaremos por la negativa y nos abstenemos: no queremos que la Argentina termine pagando más de lo que ya excesivamente va a pagar.

Nuestra posición es prudente, pero no quisiera finalizar mi exposición sin hacer alusión a una pregunta que un acreedor alemán le hizo a Alejandro Olmos cuando fue al Congreso de Alemania a defender el planteo de legitimidad de la deuda. Este acreedor le pregunta: "¿Usted está en condiciones de asegurar que esta deuda es ilegítima?" Cuando Alejandro Olmos le dice que sí, el acreedor le contesta: "Entonces, ¿por qué la están pagando?" Esta respuesta la conoce cualquier ciudadano argentino de a pie; sin embargo, el Congreso todavía no ha asumido la voluntad política de brindarle para la historia, el presente y el futuro de nuestro país.

La deuda externa es ilegal, ilegítima, fraudulenta e impagable. Ha llegado la hora y el momento de que el Congreso asuma la responsabilidad, previa a cualquier negociación, de dirimir cuáles son los aspectos legítimos y cuáles no de la deuda externa.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MONTEAGUDO

Texto del recurso de amparo presentado por los doctores Alejandro Enrique Olmos y Ricardo Daniel Marcos por el tema de la deuda externa

El martes 28 de diciembre, se presentó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3 a cargo de la doctora Vidal, y la causa lleva el N° 42.170/2004 y se caratula Olmos, Alejandro E. y otro c/Gobierno nacional s/Amparo, un recurso de amparo destinado a impedir la reestructuración de la deuda en *default*. En el mismo, se pide además se decrete la inconstitucionalidad de los decretos números 319/2004 y 1.735/2004, mediante los cuales se autorizó al Ministerio de Economía de la Nación a realizar toda esa operatoria.

La presentación judicial de 124 fojas fue hecha por Alejandro Olmos (h) y Daniel Marcos, quienes están investigando el endeudamiento externo, impulsando la causa N° 17.718 que tramita por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del doctor Jorge Ballesterio, por la Secretaría N° 4. El doctor Salvador María Lozada es el letrado patrocinante de Olmos y Marcos quien, como juez nacional de comercio, decretó en 1972 la quiebra del frigorífico Switt, haciendo extensiva la misma a su sociedad controlante Delteo Internacional. El doctor Lozada es miembro del Instituto Internacional de De-

recho Constitucional, y preside actualmente el Instituto Argentino de Realidad Económica.

La voluminosa fundamentación jurídica del recurso de amparo estriba, fundamentalmente, en que el Gobierno nacional no puede reestructurar una deuda, que fue declarada parcialmente ilícita por el juez Jorge Ballesterio, mediante el fallo dictado el 13 de julio de 2000, y que es materia de dos investigaciones, que tramitan actualmente por ante el referido magistrado, habiendo Alejandro Olmos prestado nueva declaración en una de ellas, y acompañado documentos que acreditan la ilicitud de la misma en su mayor parte.

Los presentantes estiman que hasta tanto no se expida la justicia, no puede efectuarse ninguna reestructuración, porque ello significaría alterar el orden jurídico y la división de los poderes consagrada por la Constitución Nacional.

Para mayor información dirigirse a:

—olmosgaona@yahoo.com.ar,

—tgsgrafica@fiberiel.com.ar

INTERPONE RECURSO DE AMPARO. SE DECRETE INCONSTITUCIONALIDAD. SE DICTE MEDIDA DE NO INNOVAR

Señor juez federal:

Alejandro Enrique Olmos, con domicilio real en la calle Araóz 2401, piso 14 "A", y Ricardo Daniel Marcos, con domicilio real en la calle Echeverría 5036, ambos de esta ciudad, y constituyéndolo a los efectos legales, en la calle Araóz 2401, Piso 14 "A" conjuntamente con el letrado que nos patrocina, doctor Salvador María Lozada, ante V.S. nos presentamos y como mejor proceda en derecho, respetuosamente decimos:

I. Que venimos a deducir la presente acción de amparo contra el Poder Ejecutivo nacional y el Ministerio de Economía de la Nación, y a solicitar se decrete en forma expresa la inconstitucionalidad del artículo 65 de la ley 24.156; de la ley 25.561 y la prórroga de las facultades conferidas por la misma al Poder Ejecutivo a través de la ley dictada recientemente por el Congreso de la Nación; y de los decretos 319/2004, 1.735/2004 que ordenan la reestructuración de la deuda externa, en razón de las circunstancias de hecho y las razones de derecho que a continuación se exponen.

II. *Procedencia del amparo y de la acción de inconstitucionalidad:* Que tal como lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la misma.

Que dada la inminente reestructuración de la deuda externa en *default* que alcanza a la suma de 81.800

tura que trajo la revolución científico-técnica de nuestra época, es el hecho que caracteriza al mundo actual y lo distingue de todos los anteriores. Desde muy antiguo, y respecto de su oficio, el jurista tiene planteado el siguiente dilema: o ser, quizá sin descarlo, el defensor de los privilegios, por que reduce su saber al arte de interpretar la voluntad del poder, o ser, por sobre ese conocimiento metódicamente parcial a que lo obliga el ejercicio de su profesión, un factor impulsante de la justicia (Arturo Sampay, *Constitución y pueblo*, Buenos Aires, 1973).

No es nuestra intención desconocer la idea que tiene el presidente de la Nación de querer solucionar en parte la pesada carga de la deuda, ni suponer que existe el deliberado propósito de agudizar aún más el estado de las finanzas públicas. Creemos, sí, que existe una profunda equivocación en los métodos que se han elegido para salir de este grave problema que lleva décadas de arrastre, y no podemos, en nuestra condición de ciudadanos, particularmente afectados por la decisión del Poder Ejecutivo, admitir que se continúe adelante con la ruptura del orden jurídico, con la violación de las normas constitucionales, con el permanente saqueo de nuestras riquezas, y se consagre la ilegalidad como sistema.

Tenemos plena conciencia de que existen presiones formidables sobre el gobierno del doctor Kirchner por parte de los organismos multilaterales que día a día hacen oír su voz para que se proceda con urgencia a encarar la reestructuración con los acreedores privados, y también los mercados financieros hacen saber la imperiosa necesidad de terminar con ese *default* parcial, para acceder a la posibilidad de nuevas inversiones. Todo ello supone una enorme responsabilidad que debe afrontar el Poder Ejecutivo, tratando de no crear conflictos innecesarios con la comunidad internacional, que está expectante respecto de lo que va a hacer la Argentina con el problema de la deuda. Empero, aun aceptando esa "realidad" que condiciona cualquier proyecto, no es posible violar el orden jurídico, los preceptos constitucionales, para conformar a los tenedores de bonos y a los bancos o gestores que los representan.

Está muy claro que nuestra pretensión no es impedir que se negocie lo que corresponda, sino que todos los acuerdos que eventualmente puedan hacerse se conformen dentro de un marco de legalidad y para que ello se logre es una condición fundamental establecer si la deuda que se pretende reestructurar es genuina o producto de operaciones ilícitas, tal como surgiría prima facie de la enorme documentación acompañada a la causa 17.718 y a la que inviste el megacanje. Y ello sólo podrá conocerse a través de lo que arrojen las investigaciones judiciales que se encuentran en trámite. Desconocerlas, y seguir adelante con la llamada reestructuración, significa quebrantar el orden constitucional al desconocer la división de poderes que está en la base de nuestro sistema republicano.

Santo Tomás de Aquino nos decía que la corrupción de la Justicia tiene dos causas: la astucia del sapiente, que falsifica el recto enjuiciamiento, y la violencia de los poderosos, que subvierte lo que es justo. Creemos que ha llegado la hora de que la Justicia haga oír su voz y, a través de la competencia que le acuerda nuestro texto constitucional, controle decididamente aquellos actos del poder político que han quebrantado el ordenamiento jurídico, para restablecer ese orden y, de tal manera, possibilitar que cada ciudadano obtenga lo que es justo, y no sea afectado por decisiones que menoscaban sus derechos y condicionan inevitablemente su futuro.

Por todo lo anteriormente expuesto, a vuestra señoría solicitamos:

1. - Se nos tenga por presentados por parte en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, y con el domicilio legal constituido.

2. - Se imprima al presente el trámite sumarísimo, de conformidad con lo que establecen los artículos 321 y 498 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación.

3. - Se decrete la inconstitucionalidad del decreto 319 de marzo de 2004 y del artículo 65 de la ley 24.156.

4. - Se decrete una medida de no innovar respecto de la deuda que se encuentra en mora, librándose oficio al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de que se abstenga de efectuar cualquier reestructuración de la deuda, hasta tanto no se dicte sentencia en las causas penales que tramitan por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, por la Secretaría N° 4.

5. - Hacemos expresa reserva de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que sean desconocidos nuestros derechos a la presente acción y su procedencia.

6. - Se haga lugar al amparo y se decrete la inconstitucionalidad de las normas indicadas por ser conforme a derecho.

Proveer de conformidad es justicia.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LIX KLETT

Fundamentos de la abstención del señor diputado en la votación del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley en revisión por el cual se regula el régimen al que quedarían sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido canjeados según lo establecido por el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004

El Poder Ejecutivo nacional ha remitido al Congreso de la Nación un proyecto de ley por el que

se nos pide a quienes lo integramos muchas, demasiadas cosas, diría yo.

Se nos pide, que ratifiquemos un proceso de reestructuración de la deuda en el cual, hasta el momento, no se nos había dado ni arte ni parte, a pesar de que, por el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional, corresponde a este honorable cuerpo la facultad de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".

Se nos pide que convalidemos una traición a una herencia cultural varias veces milenaria, cristalizada en principios éticos y jurídicos que integran nuestro ser nacional mismo.

Se nos pide que seamos los coautores de una conducta que encuadra perfectamente en la figura definida por el artículo 937 del Código Civil: la intimidación por injustas amenazas.

1. Se nos pide, en primer lugar, que ratifiquemos un proceso de reestructuración de la deuda en el cual, hasta el momento, no se nos había dado ni arte ni parte, a pesar de que, por el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional, corresponde a este honorable cuerpo la facultad de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".

Lamentablemente, hoy eso parece constituir un pecado menor, porque este Congreso ha venido abdicando sistemáticamente en manos del Poder Ejecutivo nacional - haciendo uso y abuso de la delegación legislativa- sus facultades propias. Y digo lamentablemente, porque en ello está en juego la dignidad de este cuerpo como poder de la Nación.

2. Se nos pide, en segundo lugar, que convalidemos una traición a una herencia cultural varias veces milenaria, cristalizada en principios éticos y jurídicos que integran nuestro ser nacional mismo.

El diputado en uso de la palabra, por un elemental deber de honestidad intelectual, debe señalar que hay un aspecto positivo en la cuestión sometida a debate, y decir que configura un adelanto intentar salir del *default*, y abordar el pago de una deuda que este gobierno ha heredado de gestiones anteriores.

Pero, simultáneamente, debe lamentar que allí se agoten los elogios, pues el propio viceministro de Economía, en el marco del *road show* realizado en Italia, ha afirmado que "el plan de canje no nos gusta ni siquiera a nosotros. Pero es definitivo y no lo vamos a modificar" ("Ambito Financiero" del 18-01-05). Nada más contundente que esa confesión de parte para definir dicho plan. Una confesión de parte, donde están comprometidos aspectos culturales, éticos, y jurídicos que no podemos silenciar.

En efecto, tiempo atrás, en un artículo de difusión periodística publicado en un matutino de mi provincia, nos permitimos señalar que "si toda la crisis argentina se redujera a un problema puramente económico podríamos afirmar que nos sentiríamos relativamente tranquilos. Pero en los últimos tiempos hemos venido observando que, junto a la de-

valuación monetaria, se está produciendo una profunda devaluación cultural por la que conceptos que hasta hace bien poco formaban parte indiscutida del legado más caro de nuestra milenaria civilización, valen hoy menos que el peso; y que el *default* en lo económico ha sido acompañado por un *default* de las ideas, de manera que lejos de las claras y distintas que propusiera Descartes como punto de partida para reconstruir los criterios de certeza, se acude a sofismas de la más variada especie en el afán de intentar justificar lo que, a la luz de esa tradición cultural, es francamente indefendible".

Y añadíamos que ello despertaba nuestra preocupación "porque el mundo civilizado, de quien ha a depender en buena medida que el país salga de esta crisis, va a evaluar no tanto los fríos indicadores económicos, como la capacidad de dar respuestas inteligentes y a la altura de esos valores que componen nuestra herencia más entrañable". Por eso, nos preguntábamos "por qué motivos no se elevan más voces críticas, por qué hay tanto silencio en torno a esta pseudocultura que se quiere imponer como verdad y que, no menos que la que caracterizara a décadas pasadas, es en realidad una auténtica anticultura".

Un claro ejemplo de este preocupante fenómeno, podemos encontrarlo en los motivos con que se ha pretendido justificar la monstruosa e indiscriminada quita de un 66,3 % sobre el valor nominal para el pago de la llamada deuda externa a los tenedores de bonos argentinos, cuando, simultáneamente, se ha dispuesto pagar sin quita a organismos multilaterales que tuvieron su buena cuota de responsabilidad en la gestación y desenlace de la crisis argentina. Lejos de una crítica constructiva dirigida a prestar colaboración con la difícil tarea que tiene entre manos el gobierno, de todo se ha intentado hacer para defender esta posición, pues se ha querido acusar de usureros a los tenedores de bonos nacionales, y se ha pretextado invocar el supremo aval del valor justicia.

Por lo pronto, la acusación es gratuita e incluso injuriosa, dirigida a todos aquellos tenedores de bonos que los recibieron en forma compulsiva (verbigracia: en pago de indemnizaciones, o cual ocurriera en el caso de las AFJP y FCI), o que no intervinieron en su compra directa (verbigracia: cuotapartistas de fondos comunes de inversión); pero, además, esa forma de razonar encierra un grueso error conceptual y un claro sofisma argumental.

En efecto, si hoy una persona nos prestare \$ 100 para que mañana le devolviéramos \$ 130, amparándonos en el carácter usurario del negocio podríamos, quizás negarnos a pagarle la ganancia de \$ 30, pero no podríamos rehusarnos a restituírle los \$ 100 que efectivamente nos prestara; mientras lo apuntáramos farisaicamente con el dedo índice tildándolo de usurero, no podríamos pretender devolverle nada más que \$ 33,7, porque aquél tendría todo el derecho del mundo a retrucarnos: ¡no proclaméis

una ética que no practicáis, ni pretendáis en nombre de la justicia despojarme de los \$ 100 que efectivamente os había prestado pues yo seré todo lo usurero que queráis, pero vosotros vais camino a transformaros en ladrones! Pedimos excusas por la crudeza del lenguaje, empleada a fines argumentales y a despertar las conciencias jurídicas de nuestras autoridades, para que se reflexione sobre los errados rumbos que se han adopatado en la materia.

Porque en la crudeza del ejemplo se nos presenta descarnada la devaluación cultural a la que venimos haciendo alusión, que todavía se torna más patente a poco que se reflexiona que, absurdamente en todo esto se ha pretendido invocar a la justicia.

Nada más alejado de nuestra herencia cultural. Porque la justicia, desde los ya lejanos tiempos de Ulpiano, ha sido definida como "la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo": tal es la sencilla fórmula con que dan comienzo las Institutas del emperador Justiniano, ya contenida en el digesto, y que proporcionara materia a tantos tratados escritos sobre el tema. Lo suyo de cada cual no es una entidad abstracta, sino la cosa concreta que a cada uno le pertenece; y que en el caso de devolución de un préstamo, es exactamente el equivalente, o lo igual, a lo antes prestado. Por lo tanto, invocar la justicia para negarse a restituir menos de lo efectivamente prestado es un disparate, cuando no el más cruel de los sarcasmos.

Por ello, una renegociación de la deuda externa que realmente pretendiera ampararse en el valor justicia, tendría forzosamente que partir del reconocimiento del capital realmente invertido por cada tenedor de bonos. Solamente así se cumpliría con el postulado de dar a cada uno exactamente lo suyo que, en este caso, sería por lo menos igual al precio efectivamente desembolsado por cada tenedor en la operación de compra de títulos.

Es cierto que se ha echado mano de otro argumento para pretender justificar la postura anunciada: la capacidad de pago del país.

Pero la capacidad de pago puede servir para justificar esperas, y alargamiento de plazos. E incluso previo acuerdo con los acreedores, quitas moderadas sobre el capital; pero quitas que, llegado ese extremo, debieran alcanzar también a los organismos multilaterales de crédito, y que, una vez más, tendrían siempre que calcularse partiendo del capital efectivamente invertido por cada tenedor.

Y es que en el afán de reducir al máximo el *stock* de deuda pública, buscando "compatibilizar los requerimientos de servicios de deuda con la capacidad de pago de la nueva estructura económica argentina", el diseño su reestructuración ha estado inspirado en criterios predominantemente económicos, olvidando los jurídicos que hubieran permitido obtener resultados económicamente similares, pero que al estar inspiradas en el valor justicia también habrían posibilitado distribuir más equitativamente las pérdidas entre todos los tenedores de bonos, de tal

manera que todos sufriesen, proporcionalmente, la misma pérdida con relación al capital efectivamente invertido.

Para demostrar que ese diseño se ha efectuado con olvido de elementales principios jurídicos, hay que señalar que la primitiva cesación de pagos y posterior oferta de reestructuración, importan una virtual presentación de la República en concurso de acreedores.

Ahora bien, en todo el mundo civilizado la materia concursal se rige por un principio fundamental: la igualdad de los acreedores (*par conditio creditorum*), lo que, traducido en buen romance, significa que todos los acreedores han de soportar igualitariamente los efectos de los acuerdos concursales, dando las mismas quitas, esperas, u otras estipulaciones al deudor común.

A la luz de este principio, es jurídicamente inadmisibles que organismos tales como el FMI y Banco Mundial que —al auspiciar a los cuatro vientos el pretendido *boom* argentino, fueron corresponsables de este verdadero desastre, reciban el tratamiento de acreedores privilegiados— pues habrán de recuperar el 100 % de su inversión, en tiempo y forma mientras los afiliados de las AFJP, cuotapartistas de FCI (las más de las veces, compulsivamente obligados a recibir esos bonos) y pequeños ahorristas de distintas nacionalidades (cándidas presas de esa nefasta propaganda), han de ser castigados con importantes quitas y/o esperas.

Pero, además, ahondando en la sustancia de este principio, y conjugándolo con aquel que ordena "dar a cada uno lo suyo", se advierte que la solución arbitrada por el gobierno es manifiestamente injusta. En efecto, recordando que lo suyo de cada cual no es sino la cosa concreta que a cada uno le pertenece, es necesario resaltar que no todos los tenedores de títulos los adquirieron al mismo valor. O sea, no todos los tenedores de títulos, aunque sus tenencias nominales puedan ser iguales, "prestaron" económicamente lo mismo al país. Hay quienes los recibieron al 100 % de su valor nominal, en pago de indemnizaciones de toda índole; hay quienes los adquirieron a precios muy cercanos al valor nominal (por dar un ejemplo solamente, los Bonte 02, llegaron a cotizar, en algún momento, al 98 %); y hay finalmente, quienes, por contrapartida, los adquirieron a valores muy bajos, cual es el caso de compras efectuadas, ya declarado el *default*, al 15 % del valor nominal.

Por lo tanto, para respetar un mínimo criterio de equidad que obligaría a repartir proporcionalmente las pérdidas entre todos los tenedores de bonos, toda quita debería haberse diseñado no sobre la tenencia nominal, sino sobre el valor de adquisición. Esto era perfectamente factible, pues —al cotizar esos bonos en un mercado secundario transparente, en el que quedan registradas todas las operaciones— es posible saber a qué precio adquirió sus títulos cada tenedor.

De ese modo hubiera sido posible obtener resultados económicamente similares en lo que hace a la reducción del *stock* de deuda, porque computando la deuda elegible para el canje por su valor de adquisición, y no por su valor nominal ya se obtiene una importante reducción, pero jurídicamente más justos; y ello, en razón de que hubiere sido posible diagramar quitas más moderadas, minimizando las pérdidas de capital de quienes los adquirieron a valores más altos, e imposibilitando que quienes los compraron a valores más bajos obtengan alguna ganancia.

Porque aquí es donde cabe señalar una paradoja: esta restructuración, que en teoría ha sido pensada para castigar la usura, y a los inversores buitres, a muchos les va a dejar importantes premios y beneficios. En efecto, para demostrarlo con un ejemplo simple: quien adquirió el bono al 15 %, aun cuando optare por el bono con mayor quita –el descuento, con una quita del 66.3 %, pero con una tasa del 8,28 %–, igualmente va a obtener una ganancia importante, llevando a más del doble su inversión y beneficiándose con una tasa más que interesante: añádase a ello que hasta u\$s 50 000 puede suscribir, en el denominado periodo temprano, bonos Par, que no sufre quitas; o también, si su tenencia es mayor o igual a u\$s 350.000, puede suscribir bonos cuasi Par, con quita del 30,1 %. Es decir, puede obtener ganancias todavía mayores, perjudicando de paso la situación de inversores de buena fe, pues el inversor “buitre” suele moverse con mucha rapidez, y la oferta de bonos Par y cuasi Par es limitada.

Estas no son digresiones teóricas sin asidero en los hechos; son realidades fácilmente comprobables. Vayan, como ejemplo, las declaraciones de un economista como Miguel Kiguel al diario “Ámbito Financiero” del día de la fecha, quien textualmente ha expresado que “gran parte de los fondos que compraron durante 2003 y 2004 a precios de 22 y 25 centavos –especialmente los que compraron bonos más líquidos en euros o yenes, muy difíciles de vender en el mercado– va a aprovechar el canje”.

Por contrapartida, quienes los adquirieron a valores altos, y a menos que puedan suscribir bonos Par por toda su tenencia nominal –lo cual, atento las limitaciones que afectan la oferta de estos bonos, no parece nada fácil, en particular si ella supera los u\$s 50.000– sufrirán importantes pérdidas.

Un caso particular de afectados serán los afiliados a las AFJP. Y es que el bono que se supone especialmente previsto para estas entidades (el cuasi Par), tiene una quita del 30,1 %, pérdida que, obviamente, habrán de sufrir los futuros jubilados. Pero, además, el monto de emisión de esos bonos, de u\$s 8.300 millones, ni siquiera alcanza para cubrir las tenencias de las AFJP, calculadas en unos u\$s 13.000 millones; ello significa que por el monto insatisfecho y recuérdese que, en la puja por esos bonos que se atribuirán conforme al criterio “pri-

mero llegado, primero servido”, eventualmente pueden tener que competir con inversores “buitres” tendrán que suscribir bonos descuento, lo que agravará las pérdidas. Por último, al ser los de más largo plazo (vencen en el 2045), y contar con una tasa de interés relativamente baja para el largo plazo (3,31 %, cuando la tasa a 30 años en los Estados Unidos ronda el 4,70 %), son los de mayor volatilidad, es decir los más sensibles a las variaciones de las tasas de interés, por lo que un aumento de las tasas de interés por parte de la reserva federal, puede precipitar una caída brusca de su valor, y dejar, eventualmente, nuevamente descapitalizadas a las AFJP.

En suma, la capacidad de pago podrá servir para justificar esperas, alargamiento de plazos, e incluso, previo acuerdo con los acreedores, quitas moderadas sobre el capital; pero quitas que, llegado e.e. extremo, debieran alcanzar también a los organismos multilaterales de crédito, y que, una vez más, tendrían siempre que calcularse partiendo del capital efectivamente invertido por cada tenedor.

Mas nunca, como hasta hoy se está pretendiendo, de quitas indiscriminadamente aplicadas por igual a quienes por haber adquirido sus títulos a distintos valores no se encuentran en igualdad de condiciones, porque de esa forma se terminaría prenuando a quien lo adquirió defaultado al 15 %, y castigando a quien lo recibió al 80 %, 90 % e incluso al 100 % de su valor. Lo que, en el lenguaje que vienen utilizando nuestros sofistas criollos defensores de la postura anunciada, equivaldría a decir: premiando al más “usurero”, y castigando al menos “usurero”, o a quien directamente no cabría siquiera calificar de “usurero”.

Porque la justicia, y esto también es una verdad que hasta no hace mucho tiempo formaba parte de nuestra milenaria herencia cultural, exige tratar como iguales solamente a quienes se encuentran en igualdad de situaciones.

3. Se nos pide, en tercer lugar, que seamos los coautores de una conducta que encuadra perfectamente en la figura definida por el artículo 937 del Código Civil: la intimidación por injustas amenazas.

E irremediablemente acuden a mi mente recuerdos de hechos pasados, de épocas en las que se nos podía que fuéramos autores de promesas; promesas luego incumplidas por este propio Congreso, pero que al menos guardaban correspondencia con la Constitución Nacional, como ocurriera con la ley de intangibilidad de los depósitos. Porque hoy se nos pide que seamos autores de otro tipo de conductas todavía más cuestionables desde un punto de vista ético, pues no existe principio alguno de derecho común o de derecho internacional en los términos del artículo 939 del Código Civil que justifique lo que se nos pide que votemos.

En efecto, si no basta lo hasta aquí dicho para demostrar que la reestructuración propuesta por el

Poder Ejecutivo nacional viola elementales principios éticos y jurídicos, y que por ello el accionar que se nos pide encuadra en la figura de la intimidación por injusta amenazas, voy a añadir un elemento más: la posibilidad de "retirar" unilateralmente "de cotización en todas las bolsas y mercados de valores, nacionales o extranjeros, los bonos" nacionales en *default*, que contempla el artículo 4º del proyecto, vulnera no solamente principios de derecho internacional, sino incluso aquellos contenidos en la propia ley que gobierna la emisión de muchos de esos títulos.

En muchos casos, como por ejemplo sucede con los bonos emitidos bajo jurisdicción alemana, se precisa 100 % de la tenencia de una serie para que ésta deje de cotizar. En ningún caso hace falta menos de 66 % para "retirar" un título de las pizarras, como ocurre con los emitidos bajo ley americana.

Pero es obvio, cuanto menos liquidez tenga un título, más caerá su valor, con lo cual lo que se pide a este Congreso es que ejerza presión sobre los bonistas, para que acepten el canje, antes de quedarse con un "papel sin valor".

4. Señor presidente, mucho se ha hablado en estos días acerca de los porcentajes necesarios para obtener un canje exitoso.

Yo afirmo que aunque ese porcentaje alcanzare al 100 %, el canje será un fracaso. Un fracaso cultural de una Nación que no ha sabido estar a la altura de los valores y principios más elementales que impregnan su ser nacional más entrañable; y un fracaso económico, de un país que podrá quizás regresar formalmente al mercado de capitales, pero a quien nadie en su sano juicio volverá a prestar nada durante muchísimo tiempo.

Soy consciente de que, posiblemente, mi voz resuene solitaria en estos momentos; soy consciente de que la gran mayoría de mis dignos pares va a estar en desacuerdo con la postura que estoy adoptando.

Soy consciente, en definitiva, de que, tal vez, no va a haber hombres que me acompañen en esta cruzada.

Pero me siento suficientemente acompañado por los principios, aquellos bellos ideales que nos legaron nuestros ancestros, y eso me basta.

5

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO BALADRÓN

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley en revisión por el cual se regula el régimen al que quedarían sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido canjeados según lo establecido por el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004

El proyecto en tratamiento, que viene con media sanción del Honorable Senado de la Nación y que

tuvo su origen en el mensaje 72/05 enviado por el Poder Ejecutivo nacional, y que tiene por objeto regular el régimen al cual quedan sometidos todos aquellos sujetos vinculados a los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido canjeados tal como lo establecía el decreto 1.735/04 del mes de diciembre del año pasado, viene acompañado de un amplio consenso en el Senado de la Nación y no tengo dudas que aquí, en diputados, lo- graremos el mismo consenso.

El consenso que se busca, señor presidente, no es sólo para legitimar una política de Estado que cuenta con el máximo nivel de aceptación de parte de todos los actores políticos, económicos y sociales nacionales. También se trata de desalentar a todos aquellos que a través de operaciones de prensa o voceros interesados, pretenden desnaturalizar el proceso de canje, diciendo que existe poco interés por parte de los acreedores o que hay un interés de aceptación que está por debajo de lo dispuesto por nuestro país.

Este proyecto de ley de tan sólo ocho (8) artículos establece algunos puntos importantes que es necesario resaltar:

–Devuelve al Congreso Nacional las facultades que habíamos delegado en el Poder Ejecutivo nacional a través de las respectivas leyes de presupuestos y compatibles con el artículo 65 de la ley 24.156 de administración financiera para identificar la deuda elegible en *default*, a efectos de establecer la oferta de canje correspondiente para normalizar la situación de endeudamiento total del país.

–Debemos ser claros en esto, señor presidente, el Poder Ejecutivo nacional actuó en el marco de sus competencias en las negociaciones iniciales a través de la delegación de las facultades que nosotros otorgamos. Pero todos sabemos que según el artículo 75 de la Constitución Nacional, somos nosotros como cuerpo legislativo quienes tenemos la facultad constitucional de arreglar el pago de la deuda interior y exterior tal como lo establece el inciso 7 de este artículo.

–Prohíbe la reapertura del canje de deuda, de acuerdo con lo previsto en el decreto 1.735/04.

–Prohíbe expresamente al Estado nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos a los que se refiere el artículo 1º de la presente ley es decir a todos aquellos bonos que no hubiesen sido presentados al canje según lo establecido en el decreto 1.735/04.

–Faculta al Poder Ejecutivo nacional a retirar mediante actos administrativos pertinentes y dentro del marco de respeto a las normas aplicables en cada jurisdicción de todas las bolsas y mercados de valores, nacionales o extranjeros, todos los bonos que no hayan sido sometidos al proceso de canje en los términos del decreto 1.735/04.

—El proyecto contempla además la remisión por parte del Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación un informe donde se refleje los efectos del canje y los nuevos niveles de deuda y la reducción de la misma, es decir, el informe dará cuenta de la relación existente entre deuda pública y producto bruto interno y el flujo de afectación de los servicios de la deuda pública, en virtud de la finalización del proceso de canje.

—En su artículo 6° establece la necesidad de que los bonos del Estado nacional elegibles por el decreto 1.735/04 que fueran depositados por cualquier causa o título a la orden de los tribunales de cualquier instancia o jurisdicción y cuyos titulares no hubieran adherido al canje o no se hubieran manifestado en contra al respecto, se canjeen por bonos Par 2038.

Es decir, señor presidente, que lo que el proyecto en debate propone es poner de cara al mundo y con todo el respaldo de los distintos sectores políticos con representación parlamentaria las reales posibilidades de pago de nuestro país. Esta oferta es la única y la posible. Si no se acepta este canje el bono entrará en el circuito residual, marginal y periférico de los denominados bonos basura.

Creo, con toda honestidad, señor presidente, que si logramos un buen resultado, como lo deseamos todos aquellos a los que nos interesa que al país le vaya bien, será uno de los ajustes más importantes en materia de deuda pública en la historia del país.

Creo también que el Congreso de la Nación, nuevamente está dando una muestra de madurez política y que ha entendido que en temas tan cruciales para el futuro de nuestro pueblo, las mezquindades políticas y las lógicas diferencias deben dejarse de lado, para apoyar una política que ha demostrado una fuerte convicción en materia de negociación de la deuda externa.

Por estos fundamentos, señor presidente, es que voy acompañar junto con toda mi bancada con el voto positivo este proyecto de ley.

Manuel J. Baladrón.

6

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GIOJA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley en revisión por el cual se regula el régimen al que quedarían sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido canjeados según lo establecido por el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que viene con media sanción del Senado, establece un régimen ju-

rílico para los bonos emitidos por el Estado nacional, que no hubiesen sido canjeados de acuerdo a la normativa de restructuración de deuda pública, puesta en marcha por el gobierno nacional, para salir del *default* (decreto 1.735/04).

La reestructuración encarada es integral, posible en orden al crecimiento y la equidad. Respeta la decisión de la sociedad argentina de cumplir con sus obligaciones y de mejorar la situación de los acreedores en la medida que ello sea a la par de un mejoramiento de la situación económica de la población argentina. En razón de ello el proyecto tiene como objetivo central, afirmar la decisión que la oferta de canje no admite mejoras por lo tanto debe considerarse definitiva.

Ante el tratamiento del presente proyecto es necesario destacar el apoyo casi unánime de las distintas fuerzas políticas en el Congreso Nacional, así como también conviene mencionar aspectos importantes de esta negociación que nos llevan a votar a favor la iniciativa presentada, a saber: *a)* El proceso de negociación post-*default* de la deuda pública, se está realizando con una cristalinidad, es decir con una publicidad del proceso de negociación, como nunca ha ocurrido antes. Solo basta con entrar a las páginas web del Ministerio de Economía y Producción para obtener toda la información que se requiera. *b)* La quita del monto a pagar respecto del total de la deuda es altamente beneficiosa para la Argentina. *c)* El diagrama de vencimientos de los bonos ofrecidos en canje tiene que ver con la posibilidades financieras reales de pago del Estado nacional, que de acuerdo a las condiciones oscilan entre los 25 y 42 años de plazo. *d)* Se dispone la emisión de valores negociables vinculados al PBI que definen claramente que el cumplimiento de las obligaciones se relaciona con el crecimiento de la economía real. *e)* El tratamiento de la presente norma, por este Congreso, restituye el mandato constitucional que establece la facultad del mismo sobre el destino de los fondos públicos, por lo que las condiciones en que deberán regirse el proceso de restructuración por canje queda bajo la responsabilidad del Parlamento argentino. *f)* La aprobación de la presente iniciativa va a consolidar la senda en que se encuentra empeñado el gobierno nacional de dar una imagen consensuada por todos los sectores políticos serios de la Argentina ante el mundo, en la resolución de un problema vital para el mantenimiento de relaciones internacionales de acuerdo con nuestro destino histórico.

Por ello, porque pertenecemos a un gobierno que está dispuesto a reconstruir la Nación de manera digna y justa, es que vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.

Juan C. Gioja.

7

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO VANOSSI

**Fundamentos de la abstención del señor diputado
en la votación del dictamen de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas
en el proyecto de ley en revisión por el cual
se regula el régimen al que quedarían sujetos
los bonos emitidos por el Estado nacional que no
hubiesen sido canjeados según lo establecido por
el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004**

Buenos Aires, 8 de febrero de 2005.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, don Eduardo Camaño
S/D.*

De mi más alta consideración:

Ante el tratamiento del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional atinente al manejo de la Argentina en su trato con los acreedores bonistas, solicito autorización para abstenerme en la votación.

Creo que la ley es innecesaria, pues el Ejecutivo tiene amplias facultades para la "negociación" de la deuda externa, toda vez que el Congreso nunca dictó una ley orgánica reglamentaria en sentido contrario o restrictivo del ejercicio de esas incumbencias. Hasta el presente, la regla general ha sido que el Congreso reserve su intervención para el momento de la aprobación del presupuesto anual.

Además, la propuesta legislativa que ahora —caso puntual— presenta el Poder Ejecutivo nacional, puede resultar inconveniente si en semanas más cambiaran las condiciones de la negociación: en un caso así, el Congreso vería con asombro que la ley sería

violada o tendría que derogarla "de apuro" (hay ejemplos cercanos, cuando al estallar la crisis, se desbordaron los cauces normativos que regían la intangibilidad de los depósitos y hasta la propia convertibilidad de la moneda).

Por lo demás, estimo que, por el artículo 27 de la Convención sobre Tratados Internacionales (conocida como "el tratado de los tratados" o como Convención de Viena sobre Régimen de los Tratados y convenios internacionales) se desprende categóricamente que ante cualquier conflicto o demanda contra el Estado argentino, éste no podría alegar su derecho público "interno" para desentenderse de sus compromisos "externos". Es pues evidente el valor muy relativo que puede revestir la ley proyectada, con relación al derecho internacional vigente; habida cuenta que dicha convención fue incorporada al orden jurídico argentino por la ley 19.865 (Boletín Oficial 11/1/73) y, teniendo presente que de conformidad con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene "jerarquía superior a las leyes".

En síntesis, por estas y otras razones voy a abstenerme en la votación, para que un voto por la negativa no pueda levantar la sospecha o el reproche de que hemos practicado una actitud "obstruccionista" en el momento más difícil y delicado de la negociación llevada adelante con tanto empeño y patriotismo por el ministro Roberto Lavagna.

Es por ello que solicito autorización de la Honorable Cámara para la abstención en la votación de dicho proyecto.

Con tal motivo, saludo al señor presidente muy cordialmente; rogándole quiera tener a bien disponer la inserción de la presente en el diario de sesiones de la Honorable Cámara.